



Consejo de Ministros

El Gobierno acuerda continuar el trámite de extradición de un egipcio próximo al expresidente Mubarak, por corrupción

- Hussein Kamal El Din Ibrahim Salem, detenido en Madrid el pasado 16 de junio a petición de las autoridades de Egipto, está acusado de utilizar sus influencias con el dirigente derrocado con el fin de obtener beneficios personales

8 de julio de 2011.- El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado la continuación en la vía judicial del procedimiento de extradición de Hussein Kamal El Din Ibrahim Salem, de nacionalidad egipcia, a las autoridades de Egipto, por la comisión de delitos de soborno, tráfico de influencias y causar pérdidas para los fondos públicos.

El reclamado es sospechoso de haber utilizado sus influencias personales con el ex presidente de la República de Egipto Hosni Mubarak con el fin de obtener beneficios personales. Así, supuestamente habría obtenido diversos favores políticos a cambio de la donación de cinco mansiones, camuflada como una venta ficticia.

Dichos favores políticos se tradujeron en la emisión de decretos de asignación de terrenos a su favor, adquisición fraudulenta de contratos públicos de venta y exportación de gas a Israel, en la localidad egipcia de Sharm El Sheik. Los perjuicios patrimoniales causados a las arcas públicas egipcias se cifran en más de 714 millones de dólares.

Hussein Kamal El Din Ibrahim Salem, que en la actualidad se encuentra ingresado en el hospital Gregorio Marañón, por motivos de salud, fue detenido en Madrid el pasado 16 de junio.



Las autoridades de Egipto amparan la solicitud de extradición en la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra la corrupción, ratificada por Egipto el 25 de febrero de 2005 y por España el 19 de junio de 2006, ya que no existe un convenio de extradición entre ambos países.

Igualmente, las autoridades del país africano aseguran la presencia de las autoridades judiciales españolas en las vistas del juicio, ya que éstas serían públicas. Advierten también que los delitos de enriquecimiento ilícito no están castigados por el código penal egipcio con la pena de muerte y que el acusado gozará de todas las garantías procesales de un juicio justo mencionadas en los tratados y convenios relacionados con los derechos humanos, incluido el Convenio Europeo de Derechos Humanos.